



Proceso	Verbal – lesión enorme
Demandante	Cinthya Guzmán Pinzón y Eduin Robinson Zapata Acevedo
Demandado	Rubén Darío, Nancy Edith, Mary Luz Betancur Vanegas, Omar de Jesús, Jhon Jairo, Diego Alberto Betancur Vanegas y Jeyson Betancur Acevedo
Procedencia	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Radicado	05001 31 03 008 2018 00611 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No. 019
Decisión	Niega recurso de casación
Tema	Si se trata de asuntos netamente patrimoniales, el artículo 339 <i>ídem</i> establece que: “cuando sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión”; el recurrente debe acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso, es labor del funcionario constatarlo, y en caso contrario corre a cargo del recurrente la carga de “aportar un dictamen pericial”, cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria.

2023-040

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, dos (2) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda, respecto del recurso de casación formulado por Cinthya Guzmán Pinzón y Eduin Robinson Zapata Acevedo frente a la sentencia proferida por el Tribunal el 19 de febrero pasado que puso fin a la instancia en el proceso verbal que promovieron en contra de Rubén Darío, Nancy Edith, Mary Luz Betancur Vanegas, Omar de Jesús, Jhon Jairo, Diego Alberto Betancur Vanegas y Jeyson Betancur Acevedo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitaron sus proponentes la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme celebrado el 30 de noviembre de 2015, contenido en el acto escriturario 4665 del 30 de noviembre de 2015 otorgado en la Notaria 21 de Medellín, por medio del cual la sociedad Alianza BB S.A.S. enajenó a Rubén Darío Betancur Vanegas los inmuebles identificados con los folios reales 001-176297 y 001-25429.

2. En sentencia del 13 de marzo de 2023 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín profirió sentencia en la que dispuso:

“Primero: Se desestiman las pretensiones de lesión enorme formuladas por los señores CINTHYA GUZMÁN PINZÓN y EDUIN ROBINSON ZAPATA ACEVEDO, quienes cedieron sus derechos litigiosos a CRISTIAN FELIPE ZAPATA GUZMÁN y ANDRÉS CAMILO ZAPATA GUZMÁN; en contra de RUBEN DARIO BETANCUR VANEGAS, y OTROS.

“Segundo: Levantar medidas cautelares.

“Tercero: No condenar a los demandantes en costas”. (Mayúsculas y cursivas propias del texto)

3. En fallo del 19 de febrero pasado el Tribunal se dispuso:

“Primero: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo anterior, proferida por el juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín en el proceso verbal que promovieron Cinthya Guzmán Pinzón y Eduin Robinson Zapata Acevedo en contra de Rubén Darío, Nancy Edith, Mary Luz, Omar de Jesús, John Jairo, Diego Alberto Betancur Vanegas y Jeison Betancur Acevedo.

“Segundo: Se condena en costas en esta instancia a cargo de Cristian Felipe y Andrés Camilo Zapata Guzmán, litisconsortes conforme al artículo 68 del C. General del Proceso. Y a quienes no se extienden los efectos del amparo de pobreza otorgado por los cedentes.

4. El apoderado de la parte accionante interpone recurso extraordinario de casación y sobre su concesión resuelve el Tribunal.

II. CONSIDERACIONES

1. El artículo 334 del Código General del Proceso, establece que el recurso extraordinario de casación procede para ser interpuesto solo contra determinadas sentencias en atención a la naturaleza del proceso en el que hayan sido proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, entre las que se cuentan: “1. *...las dictadas en toda clase de procesos declarativos. ...*”, y procede “*...cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smmlmv)....*”, salvo cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (Art. 338 Ib.), caso en el que ese elemento patrimonial no se tiene en cuenta.

Por demás, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «*sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión*», precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simultáneamente con la interposición del embate o a más tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. De todas formas, la fijación del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimación para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado¹.

2. Luego, el artículo 339 ib., frente al justiprecio del interés para recurrir y la concesión del recurso, señala:

“Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión”. (Subrayas fuera del texto)

Cuando se trata de procesos verbales como el del asunto sometido a estudio, se requiere como elemento constitutivo del interés para recurrir en casación, que el agravio pecuniario inferido al recurrente alcance al menos el mencionado umbral

¹ AC-1087 de 2024

económico, a la fecha en que el fallo fue proferido, y no antes ni después como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia entre otros, en auto, AC4040 de 2021.

“El interés para recurrir en casación, entonces, refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia impugnada, concepto que «(...) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (...) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC7638-2016, 8 nov.).

“Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala:

«(...) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.).

3. Significa lo anterior que el recurrente debe acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que como ya se dijo el mismo sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso, es labor del funcionario verificarlo, y en caso contrario corre a cargo del recurrente la carga de “*aportar un dictamen pericial*”, cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el impugnante extraordinario asume los efectos adversos de su desidia probatoria.

4. En las pretensiones de la demanda, entre otras, se solicitó

“ ...

“6° Que en el evento en que no se pueda hacer entrega de los bienes objeto de venta, se ordene la entregar el valor del precio real para fecha de la venta que es de \$2.834.410.000,00, correspondiéndole a mis representados un porcentaje del 15% para la señora CINTHYA GUZMAN PINZON, es decir, \$425.161.500 y para el señor EDUIN ROBINSON ZAPATA ACEVEDO el 10% para un valor de \$283.441.000.

“7° Que se condene al señor RUBEN DARIO BETANCUR VANEGAS a pagar a mis representados intereses a la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia contados a partir del 13 de diciembre de 2018”. (C-2, folio 31)

Atendiendo a las disposiciones legales y los prolegómenos jurisprudenciales anteriores, como elementos de juicio para determinar el agravio sufrido por los demandantes obrantes en el expediente son:

(i) Dictamen pericial del 5 de diciembre de 2018 que dictaminó que el valor comercial para el inmueble ubicado en la calle 44 No. 92-47, para la fecha de elaboración de la escritura pública 4665 del 30 de noviembre de 2015, es de \$2.834.410.000. (Archivo 2)

(ii) La codemandante Cinthya Guzmán Pinzón solicitó el reconocimiento del 15% del precio real de la venta de los inmuebles objeto del contrato demandado, que asciende a \$425.161.500,00; más los intereses a partir del 13 de diciembre de 2018, liquidados a la tasa máxima legal permitida, lo cual arroja a la fecha la suma de \$1.046.089.797,27.

(iii) Para Eduin Robinson Zapata Acevedo, peticionó el 10% sobre el precio real de esa venta \$283.441.000,00, más los intereses moratorios

a partir del 13 de diciembre de 2018, liquidados a la tasa máxima legal permitida, lo cual arroja a la fecha la suma de \$697.393.198,18.²

5. Así las cosas, como los valores de la resolución desfavorable a los recurrentes son notoriamente inferiores a la suma prevista en el artículo 334 del C. General del Proceso, resulta improcedente la impugnación extraordinaria formulada contra la providencia proferida por el Tribunal.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión**,

No **CONCEDER** el recurso extraordinario de casación interpuesto por Cinthya Guzmán Pinzón y Eduin Robinson Zapata Acevedo, quienes cedieron sus derechos litigiosos a Cristian Felipe Zapata Guzmán y Andrés Camilo Zapata Guzmán en contra de la sentencia proferida por el Tribunal el pasado 19 de febrero.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

² Se anexa a esta providencia en archivo aparte liquidaciones.

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eb79fde4f28ca0b41dc86d6087f3380e2e608fbba7b918dd47369cfae9063bbb**

Documento generado en 03/04/2024 01:36:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>